

MECALUX

Soluciones para cada necesidad de almacenaje

Estanterías para picking

Estanterías para picking con pasarelas

Estanterías para palets

Sistema Pallet Shuttle

Almacenes automáticos

902 31 32 42

MADRID - GIJÓN
SEVILLA - VALENCIA
BARCELONA

mecalux.es

ECONOMÍA Y TRABAJO



El presidente de la AEB, José María Roldán, ayer durante un desayuno informativo. / EP

La banca anuncia un plan de choque voluntario para mejorar el trato a los mayores

La AEB cree que la atención ha empeorado más en otros sectores

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid El movimiento encabezado por el pensionista Carlos San Juan para pedir una atención más humana de los bancos a los mayores sigue marcando la agenda del sector. Ayer, en la resaca de su visita a Madrid para entregar las 600.000 firmas que respaldan su petición de nuevas medidas, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, manifestó que la solución llegará a través de dos vías. La primera, un "plan de choque" que alivie de inmediato la creciente presión sobre las entidades por los problemas de los mayores para ser atendidos presencialmente. La segunda, medidas a medio y largo plazo de carácter más estructural.

Roldán fue invitado al desayuno informativo del Fórum Europa. Durante el transcurso, el directivo eludió concretar los compromisos que presentará la banca, que lleva días manteniendo reuniones con el Gobierno y que el

martes pasado se vio con el propio San Juan. Precisó, sin embargo, que la propuesta se enviará "en las próximas horas" y será una modificación del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, lanzado el verano pasado. En este documento ya se hablaba de medidas como el lanzamiento de un Observatorio de la Inclusión Financiera que se encargue de elaborar y actualizar el mapa del acceso a servicios financieros en la España rural, cursos de educación financiera, y un refuerzo de la atención telefónica.

Roldán también señaló que existirá cierta flexibilidad para que bancos con perfiles de clientes y estrategias comerciales distintas elijan tomar las acciones que mejor se adapten a su negocio.

Para Roldán, las deficiencias que San Juan ha sacado a la luz les han permitido identificar un problema de carácter estructu-

ral "al que vamos a poner remedio". Aunque admitió que no será de la noche a la mañana, insistió en que "el compromiso de la banca es que nadie se va a quedar atrás".

El representante de la patronal bancaria, cuyo mandato de ocho años está próximo a expirar, también pasó a la ofensiva en su intervención. Puso en duda que las administraciones públicas y otros actores del sector privado estén haciendo el mismo ejercicio de reflexión y elaboración de un plan para atenuar los efectos negativos de la digitalización. En este sentido, citó una encuesta de Metroscopia que coloca a la banca en quinto lugar en problemas de exclusión digital, por detrás del sector público, las compañías de suministro de gas, electricidad y telefonía, la gestión de citas médicas y la compra de billetes de avión.

Y, visiblemente molesto, puso como ejemplo el caso de su ciu-

dad natal, Teruel. "En Teruel sigue habiendo bancos, lo que no hay son otorrinos en el hospital público. Los jubilados pueden ir a las sucursales bancarias, pero no tengas un problema con un otorrino en Teruel, porque ahí te has metido en un lío".

Explosión mediática

En el sector crece la sensación de que los estándares que se están exigiendo a la banca por la explosión mediática de Carlos San Juan no se están aplicando a otras áreas donde los mayores también pasan por dificultades para efectuar trámites. Roldán achaca a la pandemia y a la fusión de dos grandes entidades—Caixa-Bank y Bankia— que la bola de nieve haya ganado tamaño, pero ha recordado que España tiene el doble de sucursales por habitante que Estados Unidos.

Durante su alocución, el presidente de la AEB alertó contra una tendencia que percibe cada vez más presente: un neoludismo que considera la digitalización como algo negativo. "Es un mundo complejo con aspectos que estamos descubriendo. Pero me preocupan afirmaciones que he visto en los medios como las de personas de 50 años que no quieren aprender a usar la aplicación del banco. No puedes quedarte al margen de la revolución digital".

Haciendo balance de la etapa en la que llevado el timón del sector, Roldán situó los bajos tipos de interés como el problema más grave para la banca, por encima incluso de la pandemia. "No somos conscientes de lo pernicioso que ha sido, ha habido una redistribución de rentas desde los ahorradores a los deudores, del sector bancario al resto de los sectores, del sector privado al público, que se ha beneficiado de estos tipos tan bajos. Su permanencia en el tiempo es lo que más me ha desconcertado. No lo vi venir".

Roldán encuadró los miles y miles de empleados que han salido de las entidades en los múltiples ERE que han llevado a cabo los bancos en un proceso de reestructuración necesario por la digitalización y la caída de la rentabilidad. Pero recalco que todas las salidas se han producido sin grandes reivindicaciones sociales, con acuerdos con los sindicatos. "Todos los que han salido lo han hecho en condiciones muy favorables".

Las ayudas públicas reducen el retraso en el abono de facturas

Las administraciones tardan el doble de lo legal en saldar sus deudas comerciales

MATTEO ALLIEVI, Madrid Las ayudas financieras del Gobierno para salvar a las empresas de la crisis del coronavirus atenúan los retrasos en el abono de las facturas. El plazo medio de pago a proveedores disminuyó un 21% en el sector público (pasando de

77 a 61 días) y un 6% en el privado (de 77 días a 72) en 2021. Esta es la conclusión del informe presentado ayer por la Plataforma Multi-sectorial contra la Morosidad, elaborado a partir de alrededor de 800 encuestas realizadas a empresas. A pesar de este progreso, los

plazos medios de pago todavía quedan lejos de los establecidos por la ley de morosidad de 2010, que corresponden a un máximo de 30 días para las administraciones públicas y a 60 días para las empresas privadas.

La ratio de morosidad, es decir, el porcentaje de impagos respecto al total de facturación, se situó en el 4,8% en comparación con el 5,4% registrado en 2020. Un dato que demuestra que "cuando se toman medidas de obligación en los plazos de pago y se ponen los recursos, se produce un cambio del comportamiento en los mismos", según apuntó el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, durante la presentación del estudio. Con respecto al futuro, la mayoría de las empresas no se ha mostrado muy

optimista, puesto que un 78% señala que su expectativa sobre el plazo de cobro durante 2022 no variará.

En el ámbito público, casi la mitad de las firmas coincide en que la administración local es la que más tarda en pagar: de estas solo un 24% lo hace dentro del plazo legal. Un tercio de los encuestados asegura que los peores pagadores son los gobiernos autonómicos, y un 19% apunta al central. En el sector privado, el 61% de las compañías sostiene que el cliente que más tarda es la gran empresa (con una facturación superior a 50 millones de euros). De hecho, solo el 20% cumplen con el plazo legal. "El retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez", agregó Cañete.